El Salvador

CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CIDAI

Proceso
informativo semanal

Año 26, Nº 1163
Septiembre 28, 2005
ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial 2
Una sociedad vulnerable

Político 4
Voluntad política y desastres

Económico 6
Visiones contrastadas sobre El Salvador

social 9
¿Somos menos vulnerables que antes?

Regional 12
El gobierno de Saca ante Venezuela

Reporte IDHUCA 14
Sobra incompetencia y falta de voluntad

Una sociedad vulnerable

La sociedad salvadoreña —y, dentro de ella, los sectores más pobres— se caracteriza por ser una sociedad tremendamente vulnerable. Distintos fenómenos naturales y socio-naturales ponen de manifiesto esa vulnerabilidad. Los terremotos de 2001 constituyen el ejemplo de rigor, debido, quizás, a la contundencia de su impacto y a lo desprevenida que encontraba a la población cuando ellos sucedieron. Pero no sólo se trata de los terremotos; los zancudos —específicamente, los transmisores de dengue— también se han encargado de mostrar, con una regularidad pasmosa, tanto las deficiencias del sistema nacional de salud como las precarias condiciones de vida de quienes son afectados directamente por esa plaga. En estos momentos, dos fenómenos naturales tienen en jaque a las autoridades y, por supuesto, en situación de zozobra a las comunidades afectadas por ellos: las emanaciones de gases del volcán de Santa Ana —que amenaza con hacer erupción— y las lluvias que han caído sobre el territorio nacional en los últimos días.

Al igual que los terremotos de 2001 y el dengue, los gases emanados del volcán de Santa Ana —sin tomar en cuenta el impacto de una eventual erupción— han sacado a luz las precarias condiciones de vida de las comunidades de las zonas afectadas por ellos. Pero no sólo eso: también han sacado a luz la impotencia de las autoridades para ofrecer una solución que no sólo permita hacerle frente al impacto del fenómeno, sino también hacerle frente a las condiciones de marginalidad de las familias que habitan las áreas de riesgo. La impotencia gubernamental se ha visto acompañada de negligencia, incompetencia e irresponsabilidad: no es otra la conclusión que se desprende de la información acerca de cómo las autoridades han dejado solas a las familias de las zonas cercanas al volcán, desatendiéndose de su necesidad de desplazarse hacia lugares más seguros.

Con las lluvias que han azotado al país en los últimos días cabe llegar a una conclusión semejante. Las autoridades —concretamente, el ministerio de Gobernación— han dado muestras de una negligencia, incompetencia e irresponsabilidad pasmosas. Los estragos causados por las lluvias en comunidades pobres que habitan en las riberas de los ríos y lagos en distintas zonas del país, o en las partes bajas de la capital —Candelaria, Modelo y La Vega, por ejemplo— no sólo se han repetido este año como en otros, sino que se han agravado por una elevación del caudal de aguas lluvias que llegan desde las zonas altas, cada vez más deforestadas y, en consecuencia, con menor capacidad de retención de agua.

El impacto de las lluvias sobre los sectores más pobres de la sociedad salvadoreña pone en evidencia tanto su vulnerabilidad como la nula disposición del gobierno para atender de forma integral sus necesidades, comenzando por la de una vivienda digna y segura. A los voceros del gobierno no se les ocurre nada mejor que naturalizar la tragedia, es decir, verla como resultado de las fuerzas ciegas de la naturaleza, ante las cuales es muy poco lo se puede

hacer. Eso no sólo los exime de cualquier responsabilidad, sino que deja en manos de cada familia —o de personas de buena voluntad que quieran ayudar— la tarea de rescatar sus escasos bienes y de buscar un lugar seguro para resguardarse.

Los grandes medios de comunicación se prestan a este juego del gobierno. Algunos de sus programas de noticias se han especializado en el arte de naturalizar el impacto social de fenómenos como la lluvia. En estos días, un reportaje de un canal local de televisión iniciaba con la frase "durmiendo con el enemigo", para referirse a los daños provocados por el desborde del río Acelhuate en la zona sur de la capital. En la perspectiva de ese tipo de periodismo, las lluvias y los ríos que se desbordan son los enemigos del hombre —en su momento, también se llegó a tipificar al zancudo transmisor del dengue como un "asesino"—, unos enemigos irracionales, cuya fuerza destructiva no se puede controlar y de cuyos daños no cabe culpar a nadie más que a la misma naturaleza.

Para ese tipo de periodismo, no hay ninguna relación entre condiciones de vida e impacto de los fenómenos naturales y socio-naturales. Para ese periodismo, no hay ninguna relación entre los estragos provocados por la lluvia y las viviendas de lámina de las familias que habitan en la ribera del Acelhuate, que fueron arrastradas por su desborde. Para ese tipo de periodismo, la pobreza, la marginalidad y la precariedad son un hecho natural, es decir, algo que, como las lluvias, el viento o la puesta del sol, siempre ha estado ahí, marcando el destino de los desposeídos de El Salvador. Por lo anterior, a ese periodismo no se le ocurre preguntarse por las razones económicas, sociales y culturales que obligan a grupos importantes de salvadoreños y salvadoreñas a vivir en condiciones que los hacen vulnerables al impacto de fenómenos naturales como las inundaciones o los terremotos.

Esas condiciones de vida, precarias e inseguras, no son en lo absoluto naturales, sino que son el resultado de un ordenamiento social y económico que funciona a espaldas de las necesidades fundamentales de la población. La fuerza de la lluvia —o de los terremotos— será todo lo natural que se quiera, pero su impacto es social. Son quienes viven en condiciones más precarias y pobres quienes resultan más afectados con el desborde de los ríos o los deslaves. Es esta precariedad la que debe ser enfrentada, pues es ella la que hace que fenómenos como la lluvia (o los terremotos) se conviertan en desastres. Se ha dicho muchas veces, pero siempre es bueno repetirlo: los desastres no son naturales, son sociales. Y en la raíz de ellos está la vulnerabilidad menor o mayor de los distintos grupos sociales. Es esa vulnerabilidad la que debe enfrentarse. Ello requiere de la implementación de un conjunto de políticas públicas que tengan como propósito el bienestar de la mayoría de la población.

Voluntad política y desastres

La estación lluviosa que actualmente se experimenta en el país ha evidenciado nuevamente que las condiciones socio-económicas no garantizan la supervivencia de la población. Una lluvia prolongada —ya no digamos temporales como los que hubo en el territorio como secuela del huracán "Katrina", que barrió con la ciudad estadounidense de Nueva Orleans— es suficiente para que zonas como el barrio La Vega, en San Salvador, sean una amenaza para la vida.

Los periódicos reprodujeron imágenes brutales de las inundaciones en todo el país. Una fotografía mostraba cómo una familia había tenido que subir los muebles de su casa hasta el techo. Otra, mostraba a una mujer mayor con el agua hasta la cintura. Otra más, a un perro tratando de llegar a la próxima orilla. Pero de todas esas imágenes, la más impactante fue la de la niña de seis años cuyo cuerpo fue llevado a varios kilómetros de distancia de su casa. La vida en El Salvador está literalmente a la intemperie y nadie parece ofrecerle un espacio para guarecerse.

Los desastres naturales son una parte innegable de la vida en El Salvador. A mediaciones del siglo XX, el historiador Jorge Lardé y Larín escribió un recuento de estos fenómenos titulada *Inundaciones, terremotos e incendios,* que resume algunas de las devastaciones principales causadas por las fuerzas de la naturaleza. La enseñanza que se puede sacar al observar ese historial de calamidades es que, si bien los desastres naturales no se pueden evitar, también es cierto que hay maneras de aminorar sus impactos.

El sistema de acueductos y alcantarillados de la principal urbe salvadoreña está aquejado de varios problemas —estructuras viejas, a punto de colapsar; tragantes tapados por la mala costumbre de arrojar basura a la calle— que pueden sintetizarse en una palabra: descuido. El problema de la limpieza de los tragantes se ha tratado de una manera vergonzosa. Prácticamente, nadie —léase alcaldía capitalina, Obras Públicas y ANDA— ha querido asumir responsabilidades. Estas dos últimas entidades siempre han dicho que la limpieza no les corresponde a ellas, sino a la alcaldía. Esta, a su vez, afirma que esta tarea le compete a la cartera de Obras Públicas.

En una maraña de confusión, en la cual no están claras las atribuciones de cada corporación —si la limpieza de los tragantes no es competencia de la alcaldía, por cuanto las calles pertenecen a San Salvador, ¿por qué el MOP puede hacer trabajos de ampliación de vías públicas sin consultarle a la alcaldía? ¿Por qué, si la alcaldía tiene potestad sobre las calles de la capital, no se ocupa de iluminarlas? Así podría seguirse la ola de acusaciones y contraacusaciones en las que todos se limpian las manos y nadie asume nada.

Estas conductas tienen dos explicaciones. Una es de carácter económico. Asumir la limpieza de los tragantes necesita de mucho dinero. Y parece que cada entidad, sea estatal, municipal o autónoma, está cuidando su presupuesto. Son entidades de servicio público, pero no quieren gastar en algo que servirá al interés público. Mejor que lo hagan otros. La otra explicación es de carácter político. Es conocida la disputa entre la comuna capitalina, en manos de la izquierda desde hace varios años, y el gobierno central.

Pero la realidad actual no admite ese tipo de mezquindades. Preocupados por las inundaciones causadas por el mal estado de los acueductos de San Salvador, el gobierno y la alcaldía capitalina se han unido para proclamar su voluntad de aunar esfuerzos para resolver estos problemas. Se pretende que ambos coordinarán sus recursos para enfrentar la repetida situación de emergencia causadas por las lluvias, aunque, como lo

dice *El Diario de Hoy*, en su edición del 24 de septiembre de los corrientes, "abordarán a largo plazo el tema de los drenajes y desagües".

Según el alcalde Carlos Rivas Zamora, la reparación de los drenajes de la capital será un proceso largo —el edil calcula que tomará dieciocho años— y su costo será mayor a los 300 millones de dólares. Los drenajes capitalinos, como se sabe, datan de 1920 y no han sido cambiados desde entonces. Los habitantes de las zonas más pobres de la capital pagan con su inseguridad los costos de la ausencia de una estrategia de desarrollo urbano de largo alcance.

El acuerdo anunciado entre el gobierno y la alcaldía de San Salvador resulta histórico. Al parecer, ambos han optado por lo más sano: dejar de lado las diferencias partidarias y asumir su rol de entidades públicas. Sin embargo, la noticia debe tomarse con cautela. Más allá del anunciado esfuerzo por evaluar toda la estructura de drenajes y desagües, hay que tomar medidas concretas. Y, sobre todo, hay que definir quién desembolsará el dinero para los trabajos de limpieza y reparación. Este ha sido el eterno problema, pues nadie ha querido afrontar los costos, con todo y que el dinero —sea el del gobierno central, sea el de la alcaldía— proviene de los impuestos de los contribuyentes.

Un acercamiento postergado

Es importante destacar que el acuerdo del gobierno y la comuna capitalina es un paso que debió haberse dado con mucha anterioridad. La indefensión de los ciudadanos es problema de todos los sectores sociales. Este acercamiento se postergó indefinidamente, debido a las disputas políticas entre los partidos que están al frente de ambas entidades: el FMLN y ARENA. ¿Qué es lo que ha cambiado para que, al parecer, se hayan soslayado las diferencias?

En primer lugar, cualquier situación de desastre es una prueba para cualquier gobierno —nacional o municipal—. Dependiendo de los aciertos o los errores al enfrentarla, este puede debilitarse o fortalecerse. Por ejemplo, el ex presidente Arnoldo Alemán se ganó el abucheo de los ciudadanos nicaragüenses al encontrarse en un carísimo viaje de bodas cuando Nicaragua era asolada por el huracán Mitch. El presidente estadounidense George W. Bush es visto ahora como el gran responsable del errático comportamiento de las autoridades norteamericanas para responder a la situación de emergencia por el huracán Katrina. Quizás con mayor olfato político que el de los personajes citados, el presidente Saca y el alcalde Rivas Zamora anunciaron sus intenciones de trabajar coordinadamente para enfrentar los desastres de la estación lluviosa.

El presidente Saca entró al gobierno con una imagen de apertura y de disposición al diálogo, en contraste con el perfil de su predecesor, Francisco Flores. Sin embargo, los espacios de diálogo abiertos durante su administración no se han visto fortalecidos por cambios efectivos en sus políticas. ¿Será esta una nueva promesa frustrada de apertura?

En lo que respecta al alcalde Rivas Zamora, hay que tomar en cuenta la situación que ocupa con relación al partido que lo llevó al poder edilicio, el FMLN. El jefe de la comuna capitalina mantuvo, durante un tiempo exasperantemente largo, una actitud de calma frente a la ola de críticas en su contra, por parte de la dirigencia efemelenista. Rivas Zamora ha sido criticado por salirse de la "línea" partidaria. Recuérdese que, junto a su par de Nejapa, René Canjura, estuvo presente en la ceremonia de toma de posesión de Saca, pese al boicot declarado por la dirigencia del partido de izquierda. Con ambos pies fuera del FMLN, a Rivas Zamora no le importan, a estas alturas, que sus ex compañeros lo critiquen por buscar acuerdos con el gobierno de Saca.

Así las cosas, el anuncio de esta estrategia conjunta contra los desastres naturales debe tomarse como uno de tantos ofrecimientos que los partidos políticos hacen a la población en épocas de crisis, mientras los actores involucrados no prueben, con hechos, lo contrario.

Visiones contrastadas sobre El Salvador

El pasado 15 de septiembre, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, se dirigió a toda la nación para celebrar el 184º aniversario de la independencia de El Salvador. Durante su discurso, el mandatario dejó en claro que el país se encuentra en la senda del desarrollo. Afirmó que "debemos seguir avanzando en la senda del desarrollo y progreso que decidimos tomar hace más de quince años". Las palabras del presidente estaban encaminadas a justificar las políticas realizadas por los pasados gobiernos de ARENA, como también las de su gobierno: "por este país que vale la pena, hemos trabajado durante los últimos quince meses. Por este país, nos hemos dedicado a trabajar sin descanso, a seguir escuchando a la gente, y sobre todo a cumplir nuestras promesas".

Según el discurso del gobernante, en el país todo marcha bien. Y si existen problemas en la senda hacia el desarrollo y la consolidación de la democracia, estos podrán ser vencidos con el esfuerzo que caracteriza a los salvadoreños. El presidente también destacó que al país le augura un futuro prometedor si se logra vencer las adversidades y ganar la batalla a la desesperanza. En resumidas cuentas, sostiene el mandatario, que el país está en el camino correcto que conlleva hacia el desarrollo desde hace quince años, y con lo que está haciendo el gobierno actual, en el futuro estará mucho mejor.

El presidente de la República y también presidente de ARENA hizo los anteriores planteamientos a varios académicos y líderes empresariales estadounidenses. El mandatario fue invitado por la Universidad de Chicago para hablar de la ejecución de diversas políticas públicas en el país. En su ponencia, el gobernante dijo que esa era una valiosa oportunidad para hablar "sobre lo que estamos haciendo en El Salvador para avanzar por los caminos del desarrollo, la libertad y la democracia". Destacó también que el desarrollo de su gestión presidencial descansa sobre cuatro elementos fundamentales: la seguridad laboral mediante la generación de más y mejores empleos, la creación de una infraestructura moderna, la inversión social para mejorar los niveles de educación y salud y, como último punto, la inserción de El Salvador en la globalización para la búsqueda de más y mejores oportunidades de inversión y comercio.

El CAFTA fue un tema importante en su exposición. El mandatario presentó el tratado como un instrumento de seguridad regional, como un instrumento de generación de oportunidades económicas y desarrollo, y también, como instrumento de integración hemisférica. Esto se debe, según Saca, a que el TLC con los EEUU logrará la consolidación de la estabilidad política, un mayor crecimiento económico y una mayor vinculación de los mercados centroamericanos. De acuerdo a esas ideas, el CAFTA es la apuesta más importante del gobierno salvadoreño en la búsqueda del desarrollo.

El discurso del presidente salvadoreño en la sexagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue del mismo tono. En su alocución, una vez más, enfatizó la visión de su gobierno: "mi administración está haciendo todos los esfuerzos para mantener una forma de gobernar con sentido humano, cerca de la gente y de sus expectativas, centralizando nuestra gestión en el desarrollo económico y social". Parece ser que, donde quiera que vaya, el mandatario siempre presenta al país como un lugar en el que se están dando grandes logros en materia económica y social. Para Saca, esto se debe a las

políticas realizadas por los gobiernos de ARENA, incluido el suyo.

Otra realidad

A pesar de las afirmaciones de éxito y avance en materia económica y social que constantemente hace el presidente dentro y fuera del país, hay entidades y personas que no comparten está visión.

En la segunda semana de septiembre, la oficina del PNUD en El Salvador presentó el *Informe sobre Desarrollo Humano 2005*. La presentación del documento estuvo a cargo del economista William Pleitez. La vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, asistió a la presentación para recibir el informe. Igualmente, también estuvieron presentes representantes de entidades empresariales y dedicadas a la investigación.

Para el PNUD, el *Informe sobre Desarrollo Humano 2005* tiene como finalidad medir el avance de los países en la consecución de la erradicación de la pobreza. En la actualidad este informe tiene una importancia especial. Esto se debe a que en el año 2000 se estipularon los Objetivos del Milenio (ODM), los cuales tienen como finalidad que los países logren en 2015 unas metas mínimas en la lucha contra la pobreza. El informe destaca que son muchos los países que se han estancado en el avance de la lucha contra la pobreza. Para el citado economista, El Salvador es uno de ellos. En el último lustro, el país no ha logrado avances sustantivos debido al estancamiento económico y el bajo nivel del gasto social.

Pleitez sostiene que el verdadero problema del país no es tanto que no se avance hacia la consecución de los ODM, sino que en los últimos años ha habido una desaceleración en el progreso del país que puede impedir que se alcancen las metas en el año estipulado (2015). El poco avance en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se debe a que el crecimiento del PIB per cápita se ha desacelerado. En 2003 hubo un retroceso en este indicador, ya que el PIB per cápita del año anterior tenía un mayor valor. Otro de los problemas que obstaculiza la lucha contra la pobreza es el bajo nivel de gasto social. En los últimos años el nivel de gasto social ha rondado el 3.1% como proporción del PIB. No ha habido esfuerzos gubernamentales por hacer mayores incrementos en el gasto social. Esto indica que si las tasas de crecimiento del PIB son cada vez menores, el gasto social, si bien sigue siendo constante como proporción del PIB, no es suficiente para hacer frente al incremento de las necesidades en educación y salud que tiene el país.

A pesar de las detalladas declaraciones de Pleitez durante la presentación del informe del PNUD, la vicepresidente de la República sostuvo que de acuerdo a los datos que maneja el gobierno, el país está logrando grandes avances en la lucha contra la pobreza. En ese sentido, el llamado de atención que realiza el PNUD hacia a los países mediante el informe, no debe considerar a El Salvador. Y es que para la mandataria, hay algunas metas que se están cumpliendo por anticipado. Esta postura concuerda fielmente con la visión positiva que tiene el presidente. Ambos consideran que la nación camina por el camino correcto y seguro hacia el desarrollo.

Este optimismo del gobierno debería ser más mesurado. Otro economista, Rafael Pleitez, ha dicho que una de los obstáculos más importantes en la lucha contra la pobreza es el nivel de gasto social. Este problema se encuentra relacionado con el nivel de endeudamiento del país. Buena parte de los fondos con los que cuenta el Estado se destina a pagar las deudas en contraposición al gasto social. El pago de la deuda no se puede soslayar en ningún momento, puesto que la situación del país depende de los niveles de clasificación de

riesgo que asignan las clasificadoras de riesgo internacional. Para FUSADES es importante que el gobierno haga mejoras en la política fiscal para hacer frente a los dos problemas: mayor nivel de gasto social y pago de la deuda.

Con respecto al CAFTA, William Pleitez, del PNUD, fue enfático en declarar que el tratado comercial con la nación norteamericana no debe ser considerado como una estrategia de desarrollo. Este debe ser únicamente un instrumento dentro de una política de Estado más integral. El gobierno debe comprender que "la tarea del desarrollo es una tarea fundamentalmente interna". Esta recomendación, en cierta manera, contradice las ideas expresadas por el presidente en la Universidad de Chicago. Tal como se expuso anteriormente, el CAFTA es fundamental para el presidente, a tal punto que la estabilidad sociopolítica, la reactivación de la actividad económica y el mejor acercamiento entre las naciones del Istmo pasan por él. Parece ser que el mandatario salvadoreño ha sobredimensionado los logros y alcances del acuerdo comercial.

¿Cambios al modelo?

Para lograr mejores avances hacia la consecución de los ODM, es necesario hacer cambios importantes en el modelo económico. Según William Pleitez, para que estos cambios sucedan, el gobierno y las demás fuerzas políticas deben "desideologizar" el debate. Debe establecerse un pacto que conlleve a cambios en la estrategia de crecimiento económico. Esta postura demuestra que, contrario a lo que piensa el presidente salvadoreño, no todas las cosas marchan por el sendero correcto. Es necesario "hacer un alto" y revisar qué es lo que está fallando en el modelo económico que se comenzó a edificar con la llegada del primer gobierno de ARENA y que posteriormente ha ido consolidándose.

Es decir, para establecer cambios en el modelo económico es menester un cambio de postura en la mayoría de los actores políticos por donde pasan muchas de las decisiones de interés nacional: el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Para que la reactivación de la actividad económica se traduzca en más empleos y mejoras en la calidad de vida, es fundamental el tipo de decisiones que se toman en la esfera política. El funcionamiento de la economía no está aparte de las leyes que en materia comercial aprueba la Asamblea Legislativa y sanciona el presidente de la República, como tampoco de las políticas públicas que ejecuta el Ejecutivo. De esta manera, el logro de consensos en el ámbito político es importante para un mejor desempeño económico del país.

Sin embargo, la visión gubernamental parece ser a la inversa. Más actividad económica, con más y mejores empleos contribuyen a la estabilidad política. Ésta depende de aquella. El problema es que el modelo económico que se ha establecido en el país parece socavar las bases de un elemento fundamental de la política: la democracia. Muchas decisiones del Ejecutivo en materia económica dejan de lado la búsqueda de consensos y la participación ciudadana. Por ello, es normal que el presidente considere, tal como lo expuso en la Universidad de Chicago, que "el CAFTA es el elemento que faltaba en nuestro proyecto de pacificación y democratización de Centroamérica".

La construcción de una verdadera democracia es una tarea interna de país. La búsqueda de la paz, la justicia y la libertad no debe confundirse con el establecimiento de un convenio comercial que permite la libre apertura de los mercados entre distintos países.

¿Somos menos vulnerables que antes?

No es necesario ser especialista para afirmar con propiedad que El Salvador es ahora tan vulnerable como ayer a las lluvias y todo tipo de desastres naturales y socio-naturales. La experiencia y el sentido común les dice a los salvadoreños, especialmente a los más expuestos a los desastres, que hoy las precipitaciones de lluvia causan más impacto que hasta hace unos años, que el agua corre descontrolada sobre las calles y avenidas de la zona sur de la capital al desbordarse el Acelhuate y sus afluentes, que las débiles edificaciones de los pobres colapsan ante la fuerza del agua y los sismos, que hasta la exclusiva zona de San Benito, al poniente de la ciudad, se ha visto afectada por las lluvias; en fin, que no se ha avanzado mucho en la gestión de riesgo desde el último desastre provocado por las inundaciones y deslaves provocadas por el Mitch, en 1998, y el daño causado por los terremotos del 2001. ¿Qué dicen los estudios científicos y técnicos sobre las últimas lluvias registradas en el país? ¿Qué dice la gente de a pie? ¿Cuál es la postura de las autoridades gubernamentales?

El dictamen de la experiencia y del sentido común

En El Salvador, donde la *vox populi* es una maestra de la lengua, se entiende por "empírico" el conocimiento o habilidad aprendida en alguna situación sin necesidad de haber ido a la universidad o al sistema formal de enseñanza. Así, hay maestros, parteras y enfermeras empíricas, que han aprendido sus artes por la transmisión del saber mediante sus padres, madres o por el propio deseo de explorar nuevos campos sin la tutela de un maestro formal. Es más o menos lo que en otras latitudes podría llamarse una persona autodidacta. También hay diputados, alcaldes y otro tipo de funcionarios públicos que cabrían en esta categoría, y que tendrían en común con los maestros, parteras y enfermeras empíricas el puro deseo de explorar nuevos campos pero sin contar con los elementos provenientes de la enseñanza formal.

Pues bien, cabría apelar al sentido de experiencia que le es inherente al concepto "empírico" para afirmar que los salvadoreños han aprendido, sin necesidad de leerlo en los manuales de sociales o geografía, que el territorio donde viven es altamente vulnerable. Lo han aprendido por experiencia. De ello no hay duda, sobre todo para quienes viven directamente en las zonas catalogadas como de alto riesgo: orillas de los ríos y quebradas, laderas de cerros y volcanes y las zonas costeras y bajas altamente vulnerables.

El sentido común, más que los datos de la ciencia y de la técnica, les dice a los salvadoreños que viven en un territorio altamente vulnerable. Y la naturaleza se encarga de recordarlo constantemente. Sin embargo, culpar a la naturaleza –como lo hacen ingenuamente muchos afectados, descaradamente las autoridades gubernamentales y algunos medios de comunicación que las secundan— es una salida fácil que habla del determinismo más burdo del que se echa mano según la conveniencia. Tal determinismo es utilizado también cuando desde el Ejecutivo se insiste en que los altos precios de los combustibles en El Salvador se deben únicamente a las leyes del mercado internacional, eximiéndose con ello de toda responsabilidad.

En contra de esta idea tan extendida en el medio salvadoreño hay que repetir hasta la saciedad que los desastres no sólo son naturales y que se deben en gran medida a

la presión irresponsable y desmedida del ser humano sobre el medio ambiente natural y a la ausencia de políticas de gestión de riesgo dentro de las esferas gubernamentales, locales y centrales. Obviamente, esto va más allá del sentido común y sugiere una cierta mirada crítica sobre la conducción de las emergencias por parte de las autoridades.

El dictamen de la ciencia y de la técnica

El 27 de septiembre, un día después de que una fuerte tormenta azotara la capital salvadoreña y el occidente del país, se leía en un reporte de la agencia internacional de noticias ACAN-EFE: "la lluvia que cayó hacia las 15.15, hora local del lunes (21.15 GMT), duró menos de una hora, pero fue suficiente tiempo para que inundara varias zonas de alto riesgo, hiciera colapsar calles principales y cortara el servicio eléctrico de varias localidades. Además —prosigue la fuente—, derribó decenas de árboles y postes de distribución de energía y de teléfono". La nota de prensa concluye: "la semana pasada las lluvias ocasionadas por los efectos indirectos del huracán 'Rita' dejaron al menos tres muertos y 150 familias evacuadas en este país centroamericano".

La prensa nacional tampoco fue ajena a los hechos. La televisión presentaba esa misma noche las impresionantes imágenes del agua desbordándose del Acelhuate y corriendo por la zona baja de la capital a la altura de los barios La Vega y Candelaria. Durante los días siguientes, los medios de prensa hicieron también lo suyo. Uno de ellos, *La Prensa Gráfica*, introduce una breve columna de análisis que vale la pena rescatar. En dicho espacio se cita un informe ("Análisis de riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra en la microcuenca del arenal Montserrat") financiado por el gobierno de Holanda y calzado por los logotipos del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) y el Centro Nacional de Registros (CNR).

En el estudio, de conocimiento del gobierno, se señala que "el riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra en la microcuenca Arenal de Montserrat, ha aumentado debido al crecimiento urbanístico dentro de la cuenca. La capacidad de infiltración del agua precipitada ha disminuido y aumentada la escorrentía superficial; ya que con una precipitación mayor de 33 milímetros algunos puntos del cauce del canal en la zona baja no son capaces de evacuar el agua lluvia; este dato de precipitación en décadas pasadas era mayor para se [sic] sucedieran tales rebalses, no obstante la época lluviosa siguen siendo normales (con excepción de los huracanes donde las intensidades son mucho mayores). Las zonas más frecuentemente inundadas (a más de 50 mm por hora) son el barrio La Vega y Candelaria. Cuando las precipitaciones son mayores a 90 milímetros por hora se tienen problemas en el área de la Feria Internacional". El documento señala justamente las zonas afectadas por las lluvias del pasado lunes.

El periodista del citado medio escrito señala con sobrada razón que "resulta cuanto menos curioso que, sabiendo que cuentan con el aplauso gratuito de algunos medios de comunicación, altos responsables del Ejecutivo —en especial de los ministerios de Obras Públicas y de Gobernación— sigan mostrando su sorpresa por lo ocurrido el lunes y quieran vender la idea de que se trató de un cuasi irrepetible diluvio. Extraña —continúa el periodista— porque ese estudio, que el Ejecutivo conoce o debería conocer, puntualiza con lujo de detalles que eso iba a suceder. Analiza con rigurosa exactitud la capacidad hidráulica de cada una de las bóvedas y calcula cuánta agua debe caer para que haya inundaciones".

De acuerdo al informe —presentado en diciembre de 2003— el avance de la urbanización en las zonas comprendidas en la microcuenca y la falta de mitigación

podrían agudizar la problemática. Además, propone las siguientes recomendaciones que contrastan con la realidad:

"(1) Desarrollar las capacidades de análisis del riesgo a nivel de todas las instituciones involucradas, para la toma de decisiones en Ordenamiento y Desarrollo Territorial. (2) Adecuación de la Legislación a fin de que pueda ser aplicada en los planes de desarrollo de infraestructura y de uso del suelo. (3) Planificación ordenada de obras civiles o de modificación de la condición natural; como el cálculo de caudales al cambiar el uso del suelo para estimar cuanta más agua se tendrá en la parte baja de la cuenca o en puntos específicos; para evaluar cuanto hay que ampliar el canal asumiendo que a futuro se tendrá mayor cobertura de infraestructura (uso proyectado del suelo con alta o baja densidad). (4) Como solución inmediata, ubicación de familias en áreas con alto riesgo y ampliación del canal de drenaje, para el caso de las inundaciones. (5) Establecer dentro de los programas educativos los conceptos del ordenamiento y desarrollo del territorio; así como de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para que el alumno tome conciencia de la importancia de ello y puede ser partícipe de la gestión respectiva, desde su comunidad o su ámbito laboral". Las recomendaciones son puntuales y precisas, mas no su aplicación.

El dictamen del gobierno y de las autoridades

Luego de ocurrido el fenómeno llegaron las esperadas frases del director del Comité de Emergencia Nacional: los habitantes de esas zonas deben acostumbrarse a lidiar con la naturaleza, el gobierno tiene controlada la situación, tenemos los fondos necesarios, etc. El rosario de frases autocomplacientes no desentonan del discurso oficial en este tipo de tragedias. La prensa también se acercó a interrogar a las autoridades municipales de San Salvador, otra de las instituciones involucradas, y su respuesta era la igualmente esperada: la municipalidad no tiene los fondos suficientes.

Como ya es habitual en El Salvador, las instituciones se echan la responsabilidad unas a otras y al final ninguna realiza acciones concretas. En contraste, el problema del drenaje de la capital es sumamente grave pues los afluentes naturales son susceptibles de desbordarse y el sistema de alcantarillas prácticamente ha colapsado pues fue construido a inicios del siglo pasado. El dictamen de las autoridades gubernamentales revela su incapacidad para manejar las situaciones de desastre que ocurren constantemente en el país.

En definitiva, la pregunta que encabeza estas líneas tiene implícita su respuesta. Los habitantes de la capital, y en general de todo el país, siguen siendo más vulnerables a los desastres en la medida en que las poblaciones y la urbanización crecen, y las autoridades no hagan uso de una eficaz política de gestión de riesgo. De nada sirven los costosos estudios como el mencionado líneas arriba y otros existentes, si falta voluntad política entre las autoridades correspondientes ni éstas no se muestren dialogantes con otros sectores de la sociedad que pueden contribuir a disminuir la vulnerabilidad de todos los salvadoreños.

El gobierno de Saca ante Venezuela

Las características que marcarían el estilo de "hacer política" de Antonio Saca, eran reconocibles desde la campaña electoral presidencial. La forma en que manipulaba información potencialmente perniciosa para ARENA o para su persona, y cómo la orientaba a su favor demostraba su "habilidad" para las comunicaciones. Pero Saca no es cualquier "buen" comunicador o sólo un "vendedor de imagen", como ha sido calificado por "expertos" en comunicaciones. Comprender qué tipo de comunicaciones son las que practica el presidente es esencial para cualquier análisis sobre sus actuaciones políticas, y en este caso para advertir qué hay detrás de la cobertura mediática del tema en boga: Ir a Venezuela a pedir "precios preferenciales" de petróleo.

¿Habilidades o artimañas?

Columnistas de periódicos han dedicado tiempo y espacio editorial a la exaltación de las estrategias comunicacionales de Saca, calificándolas de efectivas desde la perspectiva de la opinión pública como criterio. Y es que Saca ha sido bien evaluado por la población. Esto, con todo y que, objetivamente, las crisis, especialmente la económica y de violencia social, se han agudizado bajo su gestión. Algunos consultores en comunicación explican su éxito aduciendo que Saca hace comunicación política desde el modelo de comercialización, en donde el político es un producto, el ciudadano un consumidor y la sociedad un público meta dividido en segmentos. Esta explicación, sin embargo, se queda corta ante la magnitud del fenómeno comunicacional Saca.

Existe un concepto en relaciones públicas que se refiere a la manipulación parcial de la información de forma que resulte favorable: es el "spin". Este concepto, desde las relaciones públicas visto generalmente de manera peyorativa, está diseñado para obtener el mayor resultado posible del manejo de una información sin considerar faltas éticas, engaños o tácticas altamente manipuladoras de las percepciones de la población. "Spin" significa darle vuelta a una información, y asegurarse que será comprendida en el sentido buscado y que tendrá el efecto deseado. Los medios de comunicación masiva son clave para canalizar esta información tergiversada. Estas prácticas son de uso común en las esferas gubernamentales, empresariales y organizacionales, en países anglosajones. Ello ha ocurrido especialmente en Estados Unidos, en donde a partir del primer cuarto del siglo XX han formado parte de las principales herramientas de comunicación política.

La principal herramienta de comunicación política de Saca ha sido el "spin". Ha sabido usar —en beneficio propio y de ARENA— las debilidades, diferencias, e inclusive fortalezas de la principal fuerza de oposición, FMLN. Hasta ha sabido utilizar los errores y debilidades de su propio partido para dicho fin. Todo esto con el apoyo de sus fieles aliados: los medios de derecha y el capital que respalda su presencia publicitaria.

Hasta cierto punto, todos los políticos buscan usar la información a su favor con el fin de solidificar plataformas electorales y conservarse en el poder, sin embargo ese "darle vuelta a la tortilla" en el campo informativo –sin un mínimo de ética y sin una base de acciones concretas que sustenten la información manipulada— puede voltearse en contra de sus manipuladores ante cualquier coyuntura de magnitud considerable.

¿Cuál es el problema con Venezuela?

Saca ha triunfado políticamente en sus batallas mediáticas de deslegitimación del FMLN. Logró derrotarlo en las elecciones presidenciales y desprestigiar a una de sus principales caras, Schafik Handal. Saca,

asesores y aliados, envalentonados por el éxito de su sucia y tramposa campaña electoral, se dieron a la tarea de - desde el poder Ejecutivo - darle continuidad a la guerra mediática: el FMLN ha sido utilizado como chivo expiatorio de todos los males de El Salvador.

El tema nacional del momento es el alza en los precios de la gasolina. Esta coyuntura está siendo manipulada informativamente por Saca de la manera usual. Sin embargo, por la naturaleza y magnitud del problema, puede que la situación se le salga de las manos por la incapacidad de manejarlo en el campo de la realidad.

El 25 del presente mes se publicó un reportaje especial en "Enfoques" de *La Prensa Gráfica*, titulado "A la política por el petróleo". El objetivo informativo del reportaje es ambiguo, pero parece ser el siguiente: se presenta a Saca y a su ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, consternados ante la posibilidad de "tener que" ir a buscar "precios preferenciales" de petróleo a Venezuela, a sabiendas que regresarán con las manos vacías. Irán, dicen, porque pretenden desenmascarar al FMLN, partido que está usando la coyuntura como artimaña electoral para las elecciones de alcaldes y diputados de 2006. Paralelamente a esta información, *CoLatino* ha publicado información relacionada con la alta posibilidad de que Venezuela incluya a las alcaldías del FMLN en Petrocaribe.

El reportaje de *La Prensa Gráfica* y la información que de él se desprenda están funcionando como burdas justificaciones de la ineficaz actuación del gobierno arenero ante las alzas en los precios del petróleo. En el artículo, Saca acusa al FMLN de ver "esto desde una óptica ideológica". Claro que tiene una óptica ideológica, pero sería el FMLN pragmático a la vez si traduce sus relaciones con Hugo Chávez en beneficios concretos para la población. Saca se niega a buscar alternativas reales en Venezuela por la misma razón que acusa al FMLN: la óptica ideológica. Es incomprensible el espanto que las palabras "Venezuela" y "petróleo" provocan a *La Prensa Gráfica* Saca y Gavidia. El Salvador no tiene ningún problema con Venezuela, a excepción del provocado por Francisco Flores al reconocer al gobierno golpista de Chávez en 2002.

Antes, existían lazos de cooperación y acuerdos entre ambos países. Para el terremoto de enero 13 de 2001, Venezuela envió pronta ayuda para la devastada población de Comasagua. Ese mismo año, Flores y Chávez ratificaron el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, el cual podría ampliarse con Petrocaribe, con condicionantes. Petrocaribe, además está relacionado con la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, ante la cual Saca expresa grima, al menos así lo documenta el reportaje de *La Prensa Gráfica.* Petroamérica por su parte parece ir viento en popa, pero con las actitudes ideológicas de Saca, lo más probable es que no vea en ello una posibilidad de beneficio para el país.

Cuando Saca y de Gavidia declaran a la prensa que irán a Venezuela a buscar "precios preferenciales" a Venezuela "sin condicionantes" y que regresarán sin nada es verdad, pero es "spin", porque Venezuela no está dando "precios preferenciales" sin condicionantes. Enterarse de eso es tan fácil como consultar el Acuerdo de Petrocaribe en la página de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

El gobierno arenero y los medios de derecha están manipulando la información para hacer creer que de no resolver el problema no es por la ineptitud o ideología del gobierno de ARENA. Además, aprovechan para hacer campaña preelectoral. Si el FMLN maneja esta situación con habilidad, sin perderse en luchas internas estériles y beneficiando a la población, tendrán en sus manos una herramienta política poderosa que podría sacarlos del hoyo en que han estado sumidos por más de un año. No se puede tapar el sol con un dedo. Si el FMLN consigue hacer bien las cosas esta vez, con ideología y pragmatismo de la mano, quizás no habrá "spin" que salve a Saca.

Sobra incompetencia y falta de voluntad

Desde el dos de septiembre, el Centro Penal "La Esperanza" —mejor conocido como Mariona- se convirtió en el escenario de una nueva, prolongada y peligrosa agitación. En ese marco se han conocido demandas de los internos como mejorar la calidad de las comidas, flexibilizar el régimen de visitas, crear una biblioteca y destituir al Director del reclusorio. El detonante de esta situación fue el traslado de catorce reos a la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca. La Ley de Penitenciaria en su artículo 91 faculta para realizar estas reubicaciones al Director General de Centros Penales, quien manifestó que el propósito de la medida era aislar a los reclusos que ejercen una influencia negativa dentro del recinto penitenciario; la contraparte amotinada expresó su inconformidad, pues considera que su aplicación obedece a criterios arbitrarios.

El problema adquirió dimensiones peligrosas: aproximadamente 2,800 detenidos no atienden los llamados de las autoridades. Adicionalmente, el amotinamiento tiene repercusiones negativas en el ámbito judicial como la suspensión de 164 audiencias, debido a que 212 reclusos no han asistido a diligencias en sus procesos y eso puede retrasar la definición de su situación legal. El artículo 6 del Código Procesal Penal establece que una persona puede permanecer detenida provisionalmente —léase, sin condena— doce meses por delitos menos graves y veinticuatro por delitos graves. Cuando estos términos se incumplen, es obligación de las y los jueces liberar a los detenidos; si no, incurren en responsabilidad penal. En ese sentido, han hecho públicas sus críticas por el manejo de la situación.

Considerando la conflictiva historia carcelaria el país, es importante considerar y comentar declaraciones y actitudes de los siguientes funcionarios: Rodrigo Ávila, Viceministro de Seguridad Pública; Pedro González, Subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC); y el ya mencionado Director General de Centros Penales, Astor Escalante.

El Viceministro de Seguridad, frente a la coyuntura referida, sostiene que los amotinados pretenden suspender las audiencias judiciales para que se cumplan los plazos procesales ya referidos y, así, obtener su libertad; además, señaló que "algunas personas como los defensores e instituciones que dicen trabajar por los Derechos Humanos les han dicho a los internos que hagan relajo para que les suspendan los procesos" (EDH, 22/09/05, p.6). Dicho lo anterior, Ávila debería individualizar con nombre y apellido a las personas que asegura están soliviantando los ánimos de los reos, así como las agrupaciones a las que se refiere, para denunciarlas ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, sugirió reformas legales para evitar que los reclusos salgan de prisión por esa vía. Ahora que el problema se ha vuelto mayor esa es la salida más "fácil", sin importar que contraríe la normativa aprobada en 1998 mediante la cual se pretendía —entre otras cosas— eliminar toda práctica del pasado; al no incorporar excepciones en lo relativo a la privación de libertad, se buscaba impedir detenciones ilegales en las que el destino de las personas dependía del arbitrio de las autoridades. Hoy, el alto burócrata de Gobernación —en lugar de aceptar sus errores— propone que el plazo máximo de privación de libertad puede extenderse por caso fortuito y fuerza mayor. En medio del caos, resulta más fácil escabullir el bulto de las responsabilidades propias tomando medidas de forma y no de fondo.

En el caso del Subdirector policial, al ser interrogado sobre un posible ingreso de la PNC a "Mariona a imponer el orden", éste

respondió: "Primero, las personas que están recluidas pierden todos los derechos ciudadanos, por lo tanto, no pueden estar dando opiniones o quererse imponer a las autoridades del Estado"; luego le preguntaron si ese reclusorio era una bomba e tiempo y contestó: "Corremos los riesgos. Pero nuestra responsabilidad es mantener el orden y que se hagan cumplir las leyes. Si existe una ley, tiene que cumplirse, no importan los costos" (*El Mundo*, 26/09/05, p.2).

O no fue a la Academia Nacional de Seguridad Pública, o no le enseñaron en la cátedra de derechos humanos lo esencial para enfrentar situaciones como éstas. O quizá, de plano, no entendió nada. A quien se le ha dictado auto de prisión formal, según el artículo 74 de la Constitución, le suspenden sus derechos de ciudadanía que comprenden —artículo 71 de la misma— el ejercicio del sufragio, la posibilidad de asociarse para constituir partidos políticos o ingresar a los que ya existen, y optar a cargos públicos.

Comisionado González: para su información los reclusos de Mariona pueden opinar, manifestar sus demandas y pedir que se cumplan; además, con "excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos", en los pactos de derechos tanto económicos y sociales como civiles y políticos, en el Protocolo Facultativo de este último y en otros instrumentos de las Naciones Unidas (Cfr. *Principios básicos para el tratamiento de los reclusos,* Principio 1. Adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 45/111, 14 de diciembre de 1990). Ojalá reflexione este mando superior de la PNC, antiguo militar y oficial de tropas especiales en la extinta Policía de Hacienda, y no haga explotar esa "bomba de tiempo". Si no, más le hubiera valido al Presidente Antonio Saca —en el marco los cambios recientes que ordenó dentro del cuerpo— mandarlo a Guantánamo, Cuba, en "misión internacional" a "custodiar" presos afganos.

En cambio, el Director de Centros Penales adoptó una actitud distinta. Criticado en algún momento por declaraciones puntuales y por su posición "pasiva" ante la crisis, Escalante respondió así: "No quisiera que por alguna actividad penitenciaria pudiera generarse algún nivel de reacciones negativas y que esto se vaya a convertir, por ejemplo, en una matanza" (*La Prensa Gráfica*, 17/09/05, p.3). Luego, al final de la semana pasada, envió al Centro Penal una comisión integrada por profesionales en diversas materias con el objeto de poner fin al conflicto suscitado en el Penal; lamentablemente, esas negociaciones no avanzaron. Su última iniciativa: negociar personalmente con los reos. El martes 28 de septiembre se reunió con sus representantes dentro del Penal "La Esperanza" y, al final de la misma, dijo: "Vamos a buscar alternativas y soluciones. No me cabe la menor duda de que lograremos un acuerdo. No somos una administración cerrada, sino que escuchamos y vamos a analizar para encontrar una salida más viable a esta situación" (*El Diario de Hoy*, 29/09/05, p.2)

Antes de asumir posiciones como las de Ávila y González, las autoridades gubernamentales deben considerar que son las encargadas de generar condiciones para alcanzar la estabilidad de los centros de reclusión; es su obligación y la deben cumplir armonizando el orden dentro de las prisiones con el respeto de los derechos humanos de la población interna.

Más allá de la polémica, se debe apuntar que la protesta actual es parte de la crisis estructural del sistema penitenciario salvadoreño; ésta no es nueva y nunca se ha abordado con tino. Se ha actuado como un mal bombero intentando apagar fuegos. Mariona ha sido reiterada noticia interna y externa, por la incapacidad oficial para controlar revueltas sangrientas como la de

diciembre del 2002 —cuando murieron dos policías— o la de agosto del año pasado, con treinta y un reos fallecidos. Tras los hechos violentos del 2004, la propuesta oficial fue construir centros penales o utilizar instalaciones abandonadas para tal fin; también ofreció mayor control del régimen de visitas, clasificación de las personas recluidas, coordinación con organizaciones sociales para impulsar programas de reinserción y mejorar las condiciones de salud, educación y esparcimiento. Del conjunto de esas ofertas, no se ha concretado mucho. En unos casos, quizás debido a limitaciones económicas; pero en otros, al observar actitudes como las de Ávila y González, todo apunta a que —además de abundantes yerros e nulidades— lo que falta es voluntad para encontrar soluciones integrales.

El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	$ 50.00
El Salvador	
personal	$ 15.00
correo	$ 20.00
Centro América y Panamá	$ 35.00
Norte y Sur América	$ 65.00
Europa y otras regiones	$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 2210-6671 o escríbanos a **cidai@cidai.uca.edu.sv**